

La España quemada

ESTE verano, España se ha quemado la cara. Estos meses dejan como recuerdo una palabra: «incendio». Además de la trágica quema de grandes bosques, el país está encendido, sobre todo, en sus ánimos.

Hacía muchos años que España no vivía un clima de agresividad tan caliente. Han sido muchos los temas de polémica que se han avivado durante el calendario estival, suscitando violencia en gran parte de la población española: la polémica catalanista, la reinserción de etarras, la Guerra del Bonito, la lucha entre algunos medios de comunicación, etc.

La gran metáfora de esa situación de exasperación es quizás la imagen de los boniteros españoles que, asumiendo un papel de «milicia civil», arrestaron un buque pesquero francés. No vamos a comentar cada caso, sino la actitud de agresividad colectiva con que, cada vez más intensamente, vive la sociedad española los debates públicos y la responsabilidad de los medios.

Los límites de la exaltación

LA exaltación es una figura de la estrategia política totalmente legítima, y de la que se hace un uso frecuente no sólo como arma retórica partidista, sino como una forma de hacer información política por parte de

muchos profesionales de los medios de comunicación. La elección política de los ciudadanos no es tan racional como emocional, y eso impide en muchas ocasiones el que las heridas abiertas por conflictos sociales puedan encontrar una vía de salud.

La simpatía política es muy importante, pero no debe cegar la necesidad de consenso social, sobre todo en aquellas cuestiones más urgentes. Hoy día tenemos tres agujeros que han hecho honda mella en la opinión pública:

la corrupción, la reinserción y la solidaridad interautonómica. Las tres despiertan hondas pasiones y han enconado a la gente hasta «quemarla». Estos sentimientos profundos, si no son iluminados por la esperanza de una solución justa y se moderan con argumentos, pueden conducir a un malestar político que es muy insano para la convivencia.

ALGUNOS *medios de comunicación carecen de esa visión constructiva y atizan el fuego, haciendo el juego de intereses que van más acá del informar. Además, las tendencias de estilo en todos los medios de comunicación occidentales, también el español, van hacia la «cartelera de estrellas», buscando a un comunicador que es la estrella, siendo más relevante «cómo dice» que «lo que dice». En esta superioridad de «la imagen de la idea» sobre la misma idea, se da más valor a la confianza emocional en el comunicador que al juicio crítico de sus palabras, y lleva a que los debates civiles no se basen en razones que se puedan fácilmente intercambiar.*

Si, además de este ambiente soliviantado, constatamos una pugna entre algunos medios de comunicación con acusaciones cruzadas que descalifican su labor, tenemos que la opinión pública se dividirá más y se creará confusión y desconfianza.

Esta facilidad para exaltar a la sociedad española, creando prejuicios que dificultan el entendimiento comunitario, debe frenarse y es una polémica ante la que todas las sociedades occidentales buscan soluciones.

«Controlar al controlador»

POR un lado, los medios de comunicación son empresas privadas que ejercen una función política, y, por lo tanto, debe haber un control político de la comunidad española hacia ese papel. Esa ayuda social para garantizar que los medios de comunicación ejercen con justicia su labor puede venir de dos fuentes principales: la primera, de un retorno a las deontologías profesionales exigido por la misma sociedad civil.

Esta deontología se asume desde la competencia leal de las distintas empresas de comunicaciones que hacen posible un control cívico a través de una veraz «información sobre la información», no de campañas que escondan simplemente una «lucha publicitaria» por cuotas de mercado. Estos códigos éticos de la profesión también deben asimilarse en las escuelas de periodismo que el país necesita.

La segunda fuente de garantía es el control político de los periodistas, ya que disfrutaban de una posición socio-política estratégica. Precisamente en estos días se debate en Estados Unidos una moción del Congreso por la que los periodistas, igual que los políticos, deberían declarar su financiación. Aclarando este punto, se tendría conciencia de qué intereses patrocinan esas opiniones que nos prometen veracidad.

La comunicación: derecho civil

OTRO freno a ese poder desmedido sobre el sentir nacional afecta a la propia estructura de la opinión pública española, que es muy piramidal: altas elites de informadores y anchas masas que formar. Además de necesitar grandes empresas multimedia que permitan la competitividad y una mayor capacidad productiva, es preciso un cuerpo intermedio de información que añada pluralidad y más filtros sociales a la construcción mediática de la realidad. Una sociedad civil rica en comunicadores es tan clave para una democracia dinámica como una sociedad civil rica en

asociaciones. En estos tiempos en que las autopistas de información de las empresas multimedia (sobre todo si se integran las agencias publicitarias) van a definir gran parte de la cultura, la comunicación no es un producto, es un derecho civil.

Un sector tan estratégico debe controlarse tanto desde la cultura profesional, como desde la transparencia de intenciones y, por supuesto, desde una legalidad muy escrupulosa. La responsabilidad de los medios de comunicación para con la vida política va más allá de la simple información, deben habilitar esperanzas y caminos que hagan posible el deseo de paz; hacer posible vías que permitan entablar siempre un diálogo entre las distintas agencias sociales y entre los ciudadanos, no despertar odios sino esgrimir argumentos que permitan una salida amable al oponente: la justicia de la razón. Por eso es necesario que hagamos una evaluación ética de las emociones que transmiten los medios: ¿son responsables con vistas a la mejor solución?, ¿o son altavoces de intereses ajenos al bien común o incluso son «mass media parabellum»?

UNA vez pasada la galerna civil contra la corrupción (saneada gracias al trabajo de algunos medios), España está en situación de plantearse en frío una reflexión para garantizar el derecho a una comunicación veraz y plural que colabore a construir la paz social.